



¿En marcha otra estafa maestra?

LA DIVISA DEL PODER

ADRIÁN TREJO



engravet@yahoo.com.mx//@adriantrejo

Una copia de la “estafa maestra” sazonada con su correspondiente conflicto de interés, se estaría gestando en la producción del material electoral que se utilizará el 2 de junio próximo, incluida la impresión de 320 millones de boletas.

Sucede que partidos de oposición y algunos integrantes de varios Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) han denunciado públicamente las presiones que ejerce la directora de Talleres Gráficos de México (TGM), **Maribel Aguilera Cháirez** sobre los organismos electorales de los estados para que cedan la impresión de su material electoral a los talleres federales.

Así se hacía.

En noviembre pasado, Aguilera Cháirez dijo a una revista que TGM tenía la capacidad para elaborar 300 millones de boletas electorales, a partir de un acuerdo marco que suscribió con el INE.

Es a partir de ese acuerdo que la directora de los Talleres ha presionado a las OPLES para que cedan su producción de material electoral, no solo las boletas, sino las casillas y hasta los crayones.

El asunto tendría poco de extraordinario si no fuera porque Aguilera Cháirez es esposa de **Antonio Meza Estrada**, que fue secretario particular del presidente **Ernesto Zedillo** y director de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), hasta el final del sexenio.

Meza regresó a la dirección de la Conaliteg en el 2018, ya en este gobierno, apoyado por el entonces secretario de Educación, **Esteban Moctezuma**.

En el 2021, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reveló que Meza Estrada había entregado, desde la Conaliteg, 465 millones de pesos en 13 contratos públicos a dos empresas cuyos accionistas fueron parte de una asociación civil... fundada por Meza.

Igualmente, la Auditoría Superior de la Federación, hizo “observaciones” a la Conaliteg por haber entregado contratos millonarios a las empresas Gráficos Corona JE S.A de C.V, cuyo dueño es **Juan Sebastián Estrada Hernández**, sobrino de Toño Meza.

La ASF también hizo observaciones por contratos entregados a otra empresa, One to One Solutions S. A de C.V, cuya representante legal es **Lucía Azucena Estrada Hernández**, también sobrina de Meza.

El asunto con el material electoral es que por lo menos 22 OPLES -es decir, 22 estados-, han concedido que TGM imprima su material electoral, a pesar de que no se ha demostrado que la empresa federal tenga la capacidad para producirlo.

En Chiapas, por ejemplo, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, realizó una “licitación” casi a modo para que ganaran Gráficos Corona y One to One.

Quién sabe de dónde los consejeros electorales se sacaron de la manga que las bases de la licitación costarían 40 mil pesos cuando generalmente han costado entre 5 mil y 10 mil.

Lo que se alerta en todo este entramado, es que TGM pudiera estar subcontratando a otras empresas, entre ellas a las de los sobrinos de Meza Estrada, para poder cumplir con los tiempos de entrega del material.

Tal y como ocurrió con la “estafa maestra”, aunque en esta, se pagó el dinero sin que se concluyeran los estudios u obras presuntamente contratadas.

Como sea, el hecho de que primero se acapare la producción del material electoral y luego posiblemente se subcontrate a terceros, incluso familiares, no deben encender un foco más allá de una posible transa, sino por la seguridad del proceso electoral.